

Credo, necesidad y codicia: los alimentos de la guerra

Álvaro Camacho Guizado

Sociólogo, director del Centro de Estudios Socioculturales e Internacionales, CESO, Universidad de los Andes.

EN CÍRCULOS ACADÉMICOS, CENTROS DE pensamiento y, lo más importante, agencias de financiamiento internacional, se ha venido imponiendo un tipo bastante particular de literatura en relación con las nuevas características que asumen las guerras civiles desatadas especialmente a partir del fin de la Guerra Fría.

Esas nuevas aproximaciones han abierto un intenso debate sobre los pesos diferenciales que las dimensiones sociales, políticas y económicas tienen en las posibilidades y dinámicas de las guerras civiles. Mientras que para los afiliados a la primera corriente la ideología –los credos políticos– los sentimientos de agravios, las percepciones de la injusticia y la necesidad de invertir las condiciones sociales y políticas, para reivindicar los intereses de los sectores más pobres, vejados y excluidos, son los elementos fundamentales; para los teóricos de la segunda, la “economía política”, la capacidad de acceso a recursos económicos que tienen los rebeldes determina sus posibilidades de organización y subsistencia. Para los primeros, domina el altruismo, para los segundos lo que verdaderamente cuenta es la codicia.

En Colombia, como lo veremos más adelante, una creciente literatura tiende a cuestionar las explicaciones más “tradicionales” de la rebeldía guerrillera, aquellas que aún arguyen que ésta se basa en las consideraciones que hacen los rebeldes armados sobre la injusticia, la desigualdad, los agravios y las exclusiones sociales y políticas como los motores de su actividad militar. Bien sea por sus propias experiencias, bien por las de otros países en los que la rebelión armada ha triunfado, las guerrillas colombianas siguen considerando que la vía armada es la única posibilidad de confrontar esas lacras históricas.

La nueva literatura hace énfasis, en cambio, en el ánimo de lucro, el carácter de buscadores de rentas y de delincuentes económicos que son, o se han convertido, esas guerrillas. Los resortes políti-

cos han cedido a estos apetitos de codicia, y esto ha desdibujado las razones de su lucha.

Es esencial adentrarse en el debate, porque de las posturas sobre el mismo se deducen actitudes y acciones políticas de la mayor importancia. Aunque es difícil pronunciarse en una u otra dirección sin una mayor investigación empírica sobre las “verdaderas” motivaciones de los insurrectos, en este trabajo quiero plantear la hipótesis de que si bien la presencia y el uso de rentas ilegales, especialmente las ingentes sumas derivadas del narcotráfico o los impuestos a las petroleras transnacionales, tienden a teñir la actividad guerrillera de ánimo de lucro y codicia, y a desdibujar sus propósitos iniciales, al menos entre algunos sectores insurgentes, las motivaciones políticas siguen dominando su acción, y de allí que considerarlos como simples codiciosos impenitentes conduce a distorsionar su imagen, a alejar las posibilidades de encontrar salidas negociadas al conflicto armado, y a proponer alternativas bélicas y no políticas en la confrontación del principal problema político del país.

Volvamos al debate internacional: una de las más importantes contribuciones ha sido el influyente libro de Mary Kaldor¹, para quien en el contexto de la globalización lo que se considera guerra, es decir, aquellas confrontaciones armadas entre estados en las que el propósito es infligir la máxima violencia, ha devenido un anacronismo. Hoy día esas confrontaciones son mezclas de guerras, delito organizado y violaciones masivas de los derechos humanos. La naturaleza de esas confrontaciones se ve complicada por el desarrollo paralelo de una economía criminal informal que tiene los objetivos de la contienda. En el centro de la dinámica están las tensiones a que se ven sometidos los estados de las sociedades en guerra: cuestionada su autoridad a partir de su inserción en un mundo globalizado, y retada por las fuerzas que internamente lo cuestionan. En síntesis, las guerras contemporáneas y posmodernas

surgen en situaciones en las que los ingresos del Estado disminuyen por el declive de la economía y la expansión del delito, la corrupción y la ineficacia; la violencia está cada vez más privatizada, como consecuencia del creciente crimen organizado y la aparición de grupos paramilitares, mientras la legitimidad política va desapareciendo².

Su análisis sobre las contiendas de la antigua Yugoslavia muestra esa búsqueda de ventajas particularistas por medios que escapan a la supuesta naturaleza de las guerras anteriores, y en especial la compleja mezcla de economía y política, en la que los objetivos de la primera tienden a imponerse sobre los de la segunda³.

Kaldor, sin embargo, no es la única autora que resalta la dimensión económica de las guerras civiles y su vinculación con el delito organizado. Entre los textos más influyentes en estas nuevas perspectivas están los estudios realizados para el Banco Mundial por Paul Collier⁴, para quien el análisis de los nuevos conflictos debe verse a la luz de la dicotomía entre descontento y codicia. En síntesis, aunque los rebeldes deben construir un discurso en el que la injusticia y la desigualdad social imperantes son el resorte que mueve a la organización y al combate contra los opresores, la realidad indica que con frecuencia se generan fuertes hiatos entre el discurso y la realidad de la motivación económica de los rebeldes.

Según Collier, las narrativas de la injusticia y el agravio no sólo son más legítimas para los propios luchadores: también lo son de cara a la opinión pública internacional, que no apoyaría una simple guerra de saqueo que no estuviera presidida por principios altruistas. En efecto, la necesidad de legitimación nacional e internacional conduce a la formulación de discursos que apelen a la solidaridad con la rebeldía. Pero, sostiene Collier, la teoría económica señala otra cosa: según ésta, “la motivación para los conflictos no tiene importancia: lo que importa es que la organización se pueda sostener financieramente”⁵.

¹ Kaldor, Mary. *Las nuevas guerras. Violencia organizada en la era global*. Barcelona: Tusquets, 2001.

² Kaldor, Mary. Ob. cit., p. 20.

³ Esto no quiere decir que las guerras anteriores no tuvieran fundamentos económicos. Es preciso recordar que Lenin, basado en los trabajos de J. A. Hobson y de R. Hilferding, caracterizó a la Primera Guerra Mundial como una lucha imperialista por el reparto del mundo. Cfr. *El imperialismo, fase superior del capitalismo*.

⁴ Collier, Paul. “Doing Well out of War: An Economic Perspective”. En: Berdal, Mats y Malone, David M. (editores). *Greed and Grievance. Economic Agendas in Civil Wars*. Boulder y Londres: Lynne Rienner, 2000, pp. 91-111. Véase también: Collier, Paul. “Causas económicas de las guerras civiles y sus implicaciones para el diseño de políticas”. En: *El Malpensante*, No. 30, mayo-junio de 2001.

⁵ Collier, Paul. Ob. cit., 2001, p. 32.

Así, si bien en la base de los nuevos conflictos puede parecer alguna raíz asociada a un descontento, que a su vez puede estar producido por tensiones étnicas, por una intolerable desigualdad económica, ausencia o limitaciones de derechos políticos o la incompetencia gubernamental para generar un desarrollo económico aceptable, la clave de la sostenibilidad de la rebelión radica en la capacidad de los rebeldes de contar con recursos económicos⁶.

Collier sostiene que la teoría del descontento falla por tres razones fundamentales: en primer lugar, porque la formación de ejércitos rebeldes se enfrenta con las dificultades propias de organización de la acción colectiva: la injusticia, la venganza y el alivio de los agravios son bienes públicos, y por tanto susceptibles de que sobre ellos opere la idea de los *free riders*, es decir, de quienes consideran que la lucha puede ser emprendida por otros, de manera que los combatientes potenciales pueden optar por no luchar, en espera de que otros hagan el trabajo.

En segundo lugar, porque los ejércitos rebeldes, para ser exitosos, deben demostrar desde un principio que pueden ser militarmente triunfantes, y esto requiere que sean de un tamaño adecuado; de lo contrario, los riesgos de derrota son tan altos que actúan como disuasores. Se genera así un círculo vicioso en el que tamaño, eficacia y perspectivas de triunfo se muerden las respectivas colas.

En tercer lugar, antes de obtener justicia los rebeldes deben luchar, pero nada asegura que un triunfo militar produzca esa justicia deseada. Para un dirigente militar rebelde es más fácil prometer que luego cumplir⁷. Las probabilidades de que el triunfo produzca un régimen similar al derrocado son tan altas, que difícilmente pueden ser convincentes para quienes arriesgan sus vidas en una lucha incierta contra un enemigo superior.

Dados estos obstáculos, la tesis de la codicia se abre camino: a partir del examen de una base de datos internacional, Collier establece que las condiciones más propicias para una rebelión sostenible se dan en países que basan su economía en la exportación de materias primas, puesto que éstas son fácilmente gravables tanto por los gobiernos como por los insurgentes, que tienen una fuerte proporción de población joven, que constituye fuerza de trabajo militar, y que muestran bajos

niveles de cobertura educativa, puesto que el alistarse en una fuerza armada es una alternativa realista para jóvenes que carecen de opciones de movilidad social ascendente. Además, los países con más alto riesgo de rebelión se caracterizan por tener una población dispersa, difícilmente controlable por el gobierno central, y por haber experimentado conflictos armados previamente.

Ahora bien, aunque las guerras pueden ser una manifestación de conflictos políticos, no es necesariamente cierto que éstos conduzcan a la guerra:

Los analistas con frecuencia razonan retrospectivamente a partir del discurso político que se produce en el curso del conflicto y deducen que la guerra es la consecuencia de un conflicto político particularmente intenso, a su vez basado en motivos de descontento particularmente graves. Empero, la intensidad del descontento objetivo no predice una guerra civil. Muchas sociedades viven intensos conflictos políticos durante mucho años sin que éstos se conviertan en guerras. El conflicto político es universal, en tanto que la guerra es escasa. Yo argumento que allí donde la rebelión resulta ser financieramente viable, habrá guerras. Como parte del proceso de la guerra, la organización rebelde tiene que generar el descontento de grupo, en aras de la efectividad militar. La generación del descontento grupal politiza la guerra. En conclusión, es la guerra la que produce el conflicto político intenso, y no a la inversa⁸.

LAS ALTERNATIVAS: INJUSTICIA, NECESIDAD Y REBELDÍA

En Colombia esta nueva perspectiva economicista ha venido ganando adeptos, y es así como distinguidos investigadores y académicos se han matriculado en la teoría de la codicia-depredación para caracterizar la acción de las organizaciones guerrilleras. Boris Salazar, María del Pilar Castillo y Mauricio Rubio son ejemplos reveladores. Para los primeros,

no puede desconocerse, por supuesto, que el fenómeno de la exclusión política, generado por el Frente Nacional, explica el surgimiento y proliferación de las organizaciones armadas revolucionarias

⁶ Collier, Paul. Ob. cit., 2000.

⁷ Ídem., pp. 98-99.

⁸ Collier, Paul. Ob. cit., 2001, p. 43.

activas en las décadas del setenta y del ochenta. Pero la dimensión política y revolucionaria de esas organizaciones actúa en el contexto más amplio de una organización social en la que la depredación sistemática, el ejercicio de la violencia y la búsqueda de ventajas económicas prevalecen. Para decirlo de otra forma, no sólo la exclusión política explica el surgimiento y consolidación de organizaciones armadas revolucionarias en las décadas del setenta y del ochenta. Hay una explicación más amplia y con un mayor poder de cobertura: en general el contexto social favorecía la proliferación de los que estaban organizados para la depredación y para la imposición violenta, a costa del debilitamiento, y hasta la desaparición, de quienes no lo estaban⁹.

Mauricio Rubio, a su turno, realiza un notable esfuerzo para negar la tesis de la distinción entre la delincuencia común y la política, para resaltar que al fin y al cabo los delitos cometidos por unos y otros delincuentes tienen los mismos impactos sociales, y que en su actividad militar, los guerrilleros no solamente cometen innumerables delitos contra la vida humana y contra la propiedad, sino que sus ánimos rentísticos determinan en gran medida el tipo de prácticas a las que se dedican¹⁰.

En conexión con este debate es importante resaltar que Barrington Moore, en su monumental trabajo sobre las bases sociales de la injusticia y la revuelta¹¹, arguye que si una cultura hace del sufrimiento un fin en sí mismo y todas las culturas conciben ciertas formas de sufrimiento como inherentemente dolorosas, se justifica que consideremos que la ausencia de dolor es debida a alguna forma de anestesia moral o psicológica. Desde este punto de vista, Moore propone que la aseveración de que no hay un espíritu indomable de revuelta adquiere un sentido diferente. Esto quiere decir que en ciertas condiciones psicológicas y sociológicas particulares, la anestesia puede ser terriblemente efectiva¹².

La superación de esta anestesia tiene, también, unas bases sociales. En primer lugar, un rápido crecimiento de la capacidad de la sociedad de

producir bienes y servicios suficientes para aliviar la pobreza, de modo que ésta deja ser una condición percibida como natural y se convierte en un problema que podría ser resuelto. En estas circunstancias, la pobreza empieza a producir condiciones de indignación que sustituyen a las de resignación. Y esta indignación será mayor cuanto más aumente el sufrimiento de los estratos bajos. En segundo lugar, es preciso que la insatisfacción con la situación de injusticia se expanda a las clases dominantes de manera que se dividan y sea posible la formación de alianzas entre algunos dominantes y los dominados. En tercer lugar, es necesario que algunos de los miembros de las clases dominantes sean percibidos como parásitos, cuya inutilidad en la producción de riqueza es concebida como una violación del pacto social implícito. A ello debe agregarse que es preciso que las causas de la miseria y el sufrimiento tengan culpables reconocibles: empleadores, grandes propietarios, altos funcionarios estatales, etc. En cuarto lugar, es indispensable la presencia y acción de agitadores. Finalmente, en quinto lugar, es fundamental el desarrollo de espacios sociales y culturales que permitan que los dominados puedan, al menos, experimentar condiciones de mejoramiento de su situación. Esto quiere decir, simplemente, que el régimen imperante debe permitir algunas expresiones alternativas a los dominantes. En este sentido, los regímenes totalitarios cierran las puertas a esos espacios y dificultan la acción reivindicativa o de revuelta¹³.

De lo anterior se infiere que las percepciones de las injusticias y el desarrollo del descontento tienen bases y prerrequisitos sociales, y dadas ciertas condiciones, se pueden convertir en el motor de la rebelión. Es claro, desde luego, que un grado elevado de conciencia popular sobre la situación es una condición necesaria pero no suficiente para que la rebeldía tenga una expresión en alguna forma de acción colectiva o de guerra. También es claro que si no hay condiciones sociales y culturales para que se desarrollen percepciones sobre los orígenes sociales de la

⁹ Salazar, Boris y Castillo, María del Pilar. *La hora de los dinosaurios. Conflicto y depredación en Colombia*. Cali-Bogotá: Cidse-Cerec, 2001.

¹⁰ Rubio, Mauricio. *Crimen e impunidad. Precisiones sobre la violencia*. Bogotá: Tercer Mundo Editores - CEDE, 1999.

¹¹ Moore, Barrington. *Injustice, the Social Bases of Obedience and Revolt*. Nueva York, White Plains: M. E. Sharpe, 1978.

¹² Moore, Barrington. Ob. cit., p. 460.

¹³ Ídem., pp. 468 y ss.

miseria y sobre la existencia de responsables, y sin el desarrollo de organizaciones con liderazgo legítimo, las perspectivas de la rebeldía no tienen mayores posibilidades de desarrollarse. De otra parte, el soporte financiero de la rebelión es sin duda fundamental, y en esto la contribución de Collier es exacta. Pero la pregunta esencial, a la que trata de responder Moore, es si la ausencia de esos requisitos permite que la sostenibilidad económica de los rebeldes se convierta en la clave de su rebeldía. En otras palabras, la existencia de recursos es también condición necesaria pero no suficiente para el desarrollo de la rebeldía.

A la luz de estas consideraciones, examinemos algunas dimensiones del caso colombiano. Para este propósito es importante recorrer algunos hitos del desarrollo de las organizaciones insurgentes, y esto se debe hacer a partir de sus propias percepciones de la situación. Éstas, independientemente de su exactitud, precisión y objetividad, reflejan la manera como han definido la situación de injusticias y agresiones de las que han sido víctimas, y esta definición en sí misma es una clave de su acción. Con ocasión de su 38 aniversario, las FARC emitieron un comunicado en el que reconstruyeron sus primeros pasos y reiteraron lo que han venido diciendo desde su inicio como fuerza beligerante acerca de las razones de su lucha. Vale la pena citar el documento *in extenso*:

El 27 de mayo de 1964, hace 38 años surgieron las FARC-EP como respuesta política, económica, social y armada a la agresión del Régimen político oligárquico del bipartidismo liberal-conservador, contra los marquetalianos, la que se extendió después a todas las organizaciones populares. En 1964 el Estado colombiano comenzó con 16.000 hombres, la más grande operación militar de exterminio contra 46 hombres y dos mujeres bajo el mando del Comandante Manuel Marulanda Vélez, en Marquetalia.

Fue el Congreso de la República, influenciado por Álvaro Gómez Hurtado, el que autorizó al Presidente Guillermo León Valencia a agredir a Maquetalia, acusándola de ser una "República Independiente", porque en ella se habían quedado, gracias a la fertilidad de sus tierras, la mayoría de los amnistiados. Contando para esta agresión con el apoyo irrestricto de los altos mandos milita-

res, asesorados éstos, por oficiales del Pentágono y respaldados en su cometido por la gran prensa, los jefes de los dos partidos tradicionales, los latifundistas y los terratenientes. El generalato pensó que tres semanas era tiempo más que suficiente para acabar con el grupo de 48 valientes campesinos y entregarle a los militaristas un parte de victoria. Los marquetalianos después de ser agredidos, decidieron en una asamblea levantarse en armas. Antes de iniciarse la agresión contra Marquetalia, las FARC hicieron distintos llamamientos públicos dirigidos al Congreso, a los jefes de los partidos políticos, a las organizaciones sociales, a las personalidades civiles y militares, a la Iglesia católica colombiana, a las Naciones Unidas, a la Cruz Roja Internacional, a los intelectuales de Europa, entre otros, para que contribuyeran a persuadir al Estado y al Gobierno de Colombia sobre la conveniencia de darle solución pacífica y satisfactoria a las justas peticiones de los marquetalianos amnistiados, sin necesidad de volver a recurrir a la confrontación armada. Pero se impuso, como siempre, la intransigencia y la voracidad de los intereses mezquinos de la oligarquía gobernante a quien le pareció más barato no invertir cinco millones de pesos en la construcción de vías de penetración, escuelas, puestos de salud y un centro de mercadeo para sus productos, sino liquidarlos físicamente por medio de la fuerza, y con ello ahogar en sangre el deseo de cambio de la mayoría de colombianos, para que el Estado continuara, sin obstáculo alguno, con su política de "tierra arrasada" contra el pueblo, expropiando a los campesinos de las mejores tierras y entregando nuestras riquezas y soberanía a los más oscuros intereses del capital transnacional, liderado por el Fondo Monetario Internacional¹⁴.

Treinta años después los puntos de vista en relación con su historia siguen siendo similares: el tema de los agravios de que han sido víctimas los colombianos a quienes dicen representar, continúa inspirando su lucha reivindicativa. En respuesta a una carta enviada por un grupo de intelectuales y académicos a la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar en noviembre de 1992, en la que le reiteraba a la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar que su lucha había sido legítima en su origen, pero que los métodos utilizados, el

¹⁴ "38 años de FARC-EP. Documento de análisis de los voceros de las FARC-EP". Anncol, 29 de mayo de 2002. Véase: Pizarro, Eduardo. *Las FARC (1946-1966). De la autodefensa a la combinación de todas las formas de lucha*. Bogotá: IEPRI - Tercer Mundo Editores, 1992.

secuestro, la extorsión y la vinculación con el narcotráfico las habían hecho perdido su sentido original, la organización respondió que:

Es importante destacar que la lucha guerrillera revolucionaria en Colombia, nació, se desarrolló y continúa creciendo como respuesta popular a la permanente violencia del Estado que impide a sangre y fuego la existencia de una oposición al Establecimiento. No ha sido, pues ni un fin ni un objetivo. Ha sido simplemente un medio para resistir la agresión y luchar por la democracia y la dignidad (...) Las formas de lucha que ha escogido el pueblo colombiano para alcanzar un futuro digno no han sido de su libre elección. Se las han impuesto. No les han dejado opción¹⁵.

En el proceso de paz con el gobierno del presidente Pastrana, las FARC han reiterado su discurso sobre sus orígenes y agravios, y en su plataforma política, que ha servido de base a la eventual negociación, plantearon los términos de sus reivindicaciones políticas y sociales, que se convirtieron en el fundamento de los diálogos con el gobierno¹⁶.

A su turno, en el Manifiesto de Simacota, que le dio vida al ELN, esta organización expresó:

La educación se encuentra en manos de negociantes que se enriquecen con la ignorancia en que mantienen a nuestro pueblo; la tierra es explotada por campesinos que no tienen dónde caerse muertos y que acaban sus vidas y las de sus familias en beneficio de las oligarquías que viven en las ciudades como reyes; los obreros trabajan por jornales de hambre sometidos a la miseria y la humillación de

los grandes empresarios extranjeros y nacionales; los profesionales e intelectuales jóvenes demócratas se ven cercados y están en el dilema de entregarse a la clase dominante o perecer; los pequeños y medianos productores, tanto del campo como de la ciudad, ven arruinadas sus economías ante la cruel competencia y acaparamiento por parte del capital extranjero y de sus secuaces vende patrias; las riquezas de todo el pueblo colombiano son saqueadas por los imperialistas norteamericanos (...) Pero nuestro pueblo que ha sentido sobre sus espaldas el látigo de la explotación, de la miseria, de la violencia, se levanta y está en pie de lucha. La lucha revolucionaria es el único camino de todo el pueblo para derrotar el actual gobierno de engaño y de violencia¹⁷.

Nótese cómo, a diferencia de las FARC, el ELN hace más énfasis en la codicia de las clases dominantes y sus efectos sobre las clases populares. Aquí la noción de agravios cede su paso a la de injusticias sociales de las cuales es víctima el conjunto del pueblo colombiano. A este respecto, vale la pena señalar cómo una observadora del conflicto colombiano, la politóloga Terry Karl, coincide con esta posición y reconoce que, al contrario del argumento de la codicia y la venganza adelantado por Collier, en el caso colombiano es la codicia de las clases dominantes la que nutre los agravios, y cómo las motivaciones de los rebeldes siguen siendo relevantes en el presente¹⁸.

Estas narrativas de agravios e injusticias podrían interpretarse, a la manera de Collier, como un discurso justificatorio de motivaciones económicas recónditas. Más aún, Collier acepta que los dirigentes de la rebelión pueden creer en el dis-

¹⁵ Carta del 2 de diciembre de 1992 de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar a los firmantes de la carta de noviembre del mismo año, policopiado. Entre los firmantes se destacaron Gabriel García Márquez, Fernando Botero y Antonio Caballero, quienes son los destinatarios de la carta.

¹⁶ En el acuerdo con la comisión negociadora del gobierno Pastrana se adoptaron los siguientes puntos: solución política negociada, protección de los derechos humanos como responsabilidad del Estado, política agraria integral, explotación y conservación de los recursos naturales, estructura económica y social, reformas a la justicia, lucha contra la corrupción y el narcotráfico, reforma política para la ampliación de la democracia, reformas del Estado, acuerdos sobre derecho internacional humanitario, fuerzas militares, relaciones internacionales y formalización de los acuerdos. *Cfr.* Corporación Observatorio para la Paz. *Las verdaderas intenciones de las FARC*. Bogotá: Intermedio Editores, 1999, pp. 267 y ss. Acerca del debate sobre lo negociable y no negociable en el caso colombiano, véase: Posada Carbó, Eduardo; Deas, Malcolm y Powell, Charles. *La paz y sus principios*. Bogotá: Alfaomega - Corporación Ideas para la Paz, 2002.

¹⁷ ELN, *Manifiesto de Simacota*, reproducido en Corporación Observatorio para la Paz. *Las verdaderas intenciones del ELN*. Bogotá: Intermedio Editores, 2001, pp. 45-46.

¹⁸ Comentarios al informe de Marc Chernick sobre Colombia, en Woodrow Wilson Center for International Scholars, International Peace Academy, *The Economics of War. The Intersection of Need, Greed, and Creed. A Conference Report*, Septiembre 10, 2001, p. 23.

curso, es decir, que éste no es un simple subterfugio para esconder la codicia. Sin embargo, en nuestro caso, es difícil aceptar que un discurso encubridor pueda sostenerse durante más de treinta y cinco años sin que se desnuden sus dobleces y sin que en el interior de las organizaciones surjan fuertes disensos en torno a una supuesta desviación de los objetivos originales y su sustitución por una actividad simplemente económica predatoria. Las expresiones de los insurgentes a lo largo de los diferentes procesos de negociación muestran una fuerte consistencia de los discursos sobre sus temas originales como la base de su razón de existir, así la rutinización de la guerra —con sus secuelas de degradación, excesos y atrocidades— tiende a desdibujar las motivaciones originales.

Cabe también la posibilidad de que el desarrollo de la dinámica militar convierta a los grupos armados en fuerzas de ocupación y depredación en algunas de las regiones en donde actúan. No es de extrañar que las guerrillas sean proclives a usurpar los intereses locales y a presentar los suyos propios como los de la población civil bajo su control. En estas condiciones, es muy posible que los contenidos ideológicos se diluyan y se transformen en prácticas de dominación mediante las cuales las poblaciones locales se convierten en rehenes y servidoras involuntarias de los alzados en armas.

Es pertinente preguntarse, sin embargo, si el discurso y la narrativa dominantes realmente penetran en las mentes de los miembros de las organizaciones. Un argumento a favor de la idea de que se trata de un discurso de los dirigentes y no de las bases, podrían ser justamente los orígenes sociales de éstas. Se podría suponer que una eventual distancia social y cultural entre unos dirigentes relativamente educados y unas bases campesinas empobrecidas y con limitaciones educativas, impediría a estas últimas estar en condiciones de racionalizar y explicar las complejidades de las injusticias sociales, a pesar de sus propias condiciones de pobreza y de ser las principales víctimas de las injusticias y los agravios. En este sentido, la militancia estaría más basada en el engaño, la oferta de mejores niveles de ingreso o simplemente de la solución de problemas personales. Algunos testimonios de desertores podrían aportar bases para estos mecanismos de recluta-

miento. Pero, por otra parte, otros testimonios señalan cómo la instrucción política es una práctica constante, y de ello se podría inferir que los discursos y narrativas sí tienen alguna eficacia en la construcción de la visión del mundo y las razones de la lucha entre los cuadros y militantes. Ciertamente no contamos con bases empíricas para afirmar cualquiera de las opciones, y probablemente lo mejor sea aceptar que puede haber tanto de lo uno como de lo otro.

Otra dimensión del reconocimiento de que la insurgencia armada no cuenta con una fuerte base de apoyo popular, es que cualquiera que sea la eficacia del discurso, ésta se reduce a la organización insurgente. Es posible que esto se deba justamente al carácter militar de la lucha, por cuanto ésta por definición excluye a la mayoría de la población que no está en condiciones de tomar las armas; o también a que esa militarización lleva, como de hecho ha llevado, a la comisión de un número importante de intolerancias, excesos, errores y abusos, de los que la población resulta víctima y que se convierte en enemiga o al menos en actor neutral.

Pero también la ineficacia del discurso puede deberse a que una población que percibe el sentido de la injusticia y el sufrimiento, pero no encuentra vías de expresión organizada contra los opresores, probablemente derive en opciones anárquicas, individualistas y apolíticas, o en un hiperdesarrollo de la delincuencia, organizada o no. En un ensayo anterior sostuve la tesis de que frente a los cierres para la acción colectiva reivindicatoria, algunos sectores sociales pueden recurrir a prácticas como el rebusque, el clientelismo o la corrupción, en las que las opciones individuales dominan sobre las posibilidades de organización, y que operan como artilugios para percibir algunos beneficios individuales del mercado o del Estado¹⁹. El rebusque es una típica fórmula que tiende a hacer desaparecer la responsabilidad del Estado en la garantía de los mecanismos de supervivencia y reproducción social de quienes recurren a él. El clientelismo y la corrupción son, por el contrario, mecanismos mediante los cuales se busca obtener recursos del Estado por vías privadas o ilegales. En ambas tendencias se despoja al Estado de sus responsabilidades y se lo debilita en su legalidad.

Éstos son típicos recursos a los que se puede

¹⁹ Camacho Guizado, Álvaro. "Democracia, exclusión social y construcción de lo público en Colombia". En: *Nueva Sociedad*. No. 171, enero-febrero de 2001.

acudir en ausencia de los mecanismos de superación de la anestesia que señala Moore. Si la legalidad y el marco institucional son débiles y no concitan adhesiones, y si el sistema político no garantiza una amplia inclusión de la población en el marco de decisiones y obtención de recursos, las opciones individuales y las prácticas ilegales encuentran caminos expeditos. En tales condiciones, unirse a una lucha revolucionaria, que implica privaciones, sacrificios y riesgos, no tiene mayor sentido. Las ofertas de beneficios que pueden presentar las guerrillas no pueden competir con estas otras opciones. Los insurgentes terminan, así, representándose solamente a sí mismos.

Finalmente, y como contraprestación, ¿qué se le puede pedir a una organización rebelde cuando las propias cifras oficiales destacan los aplazamientos de las reformas sociales reclamadas por ella desde hace más de tres décadas, cuando se hace evidente el creciente desarrollo de la desigualdad social, las dificultades del acceso de la mayoría de la población a bienes y servicios prometidos por los dirigentes con insistente regularidad? ¿Qué se puede argumentar frente a una frustración histórica de generaciones? Más aún, ¿cómo pedir un desarme de los insurgentes si se tienen experiencias recientes de exterminios de militantes en tregua o en proceso de reinserción?

CODICIA Y REBELDÍA

Volvamos al tema de la codicia de Collier. Sea lo primero aceptar su noción de que las bases del conflicto no son las mismas de la guerra. El primero, puede estar basado tanto en la percepción de injusticias y agravios como en la ideología de los rebeldes, para quienes las condiciones prevalentes en sus sociedades deben ser cambiadas. Otra cosa es, sin embargo, que el conflicto pueda transformarse en guerra, para lo cual la disponibilidad de recursos financieros para los rebeldes es una clave ineludible. Aunque la lógica de la argumentación pueda ser correcta, quedan, no obstante, algunos puntos que requieren mucha mayor elaboración.

El primero de ellos es la discusión sobre el origen de los recursos necesarios para la guerra. Collier reconoce que los gobiernos siempre pueden financiar sus ejércitos mediante la imposición de tributos y, por tanto, pueden guerrear unos con otros. En cambio, las circunstancias para que

una organización rebelde pueda financiar un ejército son realmente excepcionales²⁰. Este punto es central, porque remite al tema fundamental de la financiación de la rebelión. En efecto, ¿cuáles pueden ser las fuentes legítimas de recursos para sostener un ejército rebelde, que no tiene una opción similar a las del Estado? Si durante la vigencia de la Guerra Fría era teóricamente posible obtenerlos de los países del Bloque Soviético, hoy esa opción está totalmente descartada. ¿Cuáles pueden ser, entonces, esas fuentes opcionales? La literatura contemporánea sobre el tema ha abundado en la descripción de casos de fuerzas rebeldes que recurren al comercio internacional de mercancías legales como diamantes, o ilegales, como heroína, cocaína o marihuana. Pero también pueden recurrir a prácticas internas como el secuestro, la extorsión, el robo de recursos naturales, los asaltos bancarios, etc.

Claramente estamos frente a dos opciones diferenciables, sea que se trate de productos legales o ilegales, y sea que se actúe en mercados internacionales o internos. Cuando se trata de bienes legales y mercados internacionales, los rebeldes se ligan con compradores legales, a quienes el comercio de estos bienes convierte en receptadores²¹, pero quienes no son objeto de castigo en sus respectivos países. En el segundo caso, los rebeldes de cualquier manera requieren las divisas necesarias para la adquisición de armas, en cuyo caso también se enlazan con productores legales en un comercio frecuentemente clandestino o disfrazado. El problema, así, es fundamental, puesto que de cualquier forma hay complicidades internacionales que nutren las confrontaciones militares internas. Si las mercancías son ilegales, los insurgentes se enlazan con la delincuencia internacional organizada, pero si son legales, lo hacen con comerciantes reconocidos: en ambos casos el comercio nutre la guerra.

Finalmente, otra opción es que se trate de productos que son por sí mismos nocivos e ilegales. Una cosa es el comercio ilícito de esmeraldas, oro o diamantes, y otra el de heroína o cocaína. En el segundo caso, los rebeldes no sólo se ligan con bandas de delito internacional organizado; también contribuyen a deteriorar condiciones de vida de sectores de la población consumidora. La magnitud del delito internacional es mucho mayor, desde luego, y esto contribuye, más que algu-

²⁰ Collier, Paul. Ob. cit., 2001, p. 30.

²¹ Reducidores, en el lenguaje colombiano.

nas acciones internas delictivas de los rebeldes, a deslegitimarlos ante las comunidades nacional e internacional.

En Colombia el ELN ha sido insistente en considerar el narcotráfico como un delito de lesa humanidad, y ha negado sistemáticamente su vinculación con traficantes. Ha preferido optar por el secuestro (la retención, en su lenguaje) o la extorsión (el impuesto revolucionario), que obviamente concibe como opciones menos deletéreas y por tanto más legítimas. Es una opción basada en consideraciones políticas y éticas, al fin y al cabo. En el Acuerdo de Puerta del Cielo, una de las tantas bases de negociación en las que se ha embarcado el ELN, leemos que la organización

se compromete a suspender la retención o privación de la libertad de personas con propósitos financieros, en la medida en que se resuelva por otros medios la suficiente disponibilidad de recursos del ELN, siempre que –mientras culmina el proceso de paz con esta organización– no se incurra en su debilitamiento estratégico²².

Más aún, en el informe a la organización de uno de los negociadores del ELN en las recientes conversaciones con el gobierno nacional en La Habana, se lee que luego de que el ELN exigiera una suma determinada para mantener a sus efectivos durante un período de tregua, las partes no llegaron a un acuerdo: “Fuera de existir diferencias en la cantidad de fuerza a cubrir y el monto necesario a cubrir *per se* (sic), existieron diferencias sobre el manejo y la autonomía de los fondos”²³.

Las FARC, en cambio, no han hecho una condena similar del narcotráfico, al que consideran un fenómeno social y económico propio de la miseria campesina, y que se resolverá eventualmente cuando los productores puedan vivir de otros productos legales. En el proceso de negociaciones con el gobierno han propuesto, sin embargo, una actividad conjunta para experimentar con la erradicación manual de los cultivos ilícitos, y para ello solicitaron el despeje de un municipio adicional a los asignados en el proceso de negociaciones, lo que no fue aceptado por el gobierno.

Al mismo tiempo, han argüido también que no gravar la producción y exportación de la droga

sería una forma de subsidio a productores y comerciantes, lo que constituye una forma de discriminación positiva a favor de los narcotraficantes, especialmente. El tema al que no hacen mayor alusión, y sobre el cual volveremos, es saber hasta qué punto estas consideraciones han pasado a un segundo lugar frente a la necesidad ineludible de obtener recursos financieros crecientes para la guerra; es decir, si las exigencias económicas superan la filantropía frente a los campesinos pobres de las zonas de producción.

El segundo punto es la discusión necesaria sobre la destinación de los recursos por parte de las organizaciones rebeldes. Una cosa es que los insurgentes sean codiciosos, que tengan un ánimo de lucro y que hagan apropiaciones privadas de los recursos obtenidos con el propósito de enriquecerse o disfrutar en forma individual o colectiva de los mismos, y otra es que éstos sean dedicados a fortalecerse en lo militar y lo estratégico. Aunque ha habido suficiente información de prensa para afirmar que se han dado no pocos casos de desertores codiciosos, no tenemos suficiente información sobre su número y las razones de su desertión. Es posible, desde luego, que exista un número apreciable de casos de este tipo, y en este sentido adquiere validez el argumento de Rubio cuando señala que es un error imputarle a la totalidad de los miembros de una organización insurgente una clara motivación altruista²⁴. Sin embargo, esta argumentación no puede convertir en regla ese comportamiento.

Otra línea aún es que las frecuentes acciones predatorias, las intolerancias y los abusos que comenten agentes guerrilleros con la población civil lleven a crecientes sectores de la población civil a imputarles a las organizaciones guerrilleras fines de enriquecimiento. El secuestrar ciudadanos que no forman parte de la élite económica nacional, a medianos empresarios y propietarios de tierras, el robo de vehículos y otras tantas prácticas abusivas y violentas contra ciudadanos inermes, da pie para que se construya esa idea, que tiende a generalizarse en la medida en que los insurgentes actúan cada vez más frecuentemente de manera predatoria.

Sin embargo, las perversiones observables no pueden oscurecer el panorama general de la rebelión. En este sentido, y si se acepta que podemos

²² Acuerdo de Puerta del Cielo entre el ELN y la Comisión Nacional de Paz, Artículo 9.

²³ “La paz exige grandeza”. 3 de junio de 2002 y “Rueda radial nacional”. 17 de mayo de 2002. (Coyuntura nacional e internacional, tregua integral bilateral).

²⁴ Rubio, Mauricio. Ob. cit., pp. 114 y ss.

estar ante una tendencia a la criminalización de la lucha guerrillera, el aplazamiento de alternativas y negociaciones políticas es el mejor combustible para esta dinámica perversa.

Este último punto lleva a hacer énfasis en la necesaria distinción entre los abusos militares y estratégicos y los económicos o predatorios, cuando éstos están al servicio del ánimo de lucro. La voladura de puentes y torres de energía eléctrica, la toma y destrucción de pueblos, los secuestros masivos, el uso de armas prohibidas, la ejecución de civiles desarmados y otras violaciones del Derecho Internacional Humanitario, que son objeto de condena universal, suscitan rechazos justificados de las víctimas y son también objeto de condena. Estas acciones afectan, desde luego, al conjunto de la población, producen desplazamientos masivos de gentes, descontento y miseria, pero tienen que ser vistas como parte de una guerra, que no por ser irregular y degrada pierde su dimensión política. Cuando se trata de atracos, robos o asaltos que engrosan los bolsillos privados de sus autores se ha perdido esa dimensión.

Esto justamente suscita el cuarto comentario: la prolongación de la guerra, la intersección entre las necesidades militares y la búsqueda de recursos financieros para alimentarla se han traducido en una situación en la que es muy difícil distinguir y separar la acción política rebelde del delito común organizado. De nuevo, una cosa es que los insurgentes cobren impuestos-vacunas a los sectores más ricos del país, o que reclamen subsidios de las multinacionales; otra es que en la adquisición de ingresos se ligen con delincuentes no políticos. El intercambio de secuestrados o la comercialización de drogas ilícitas no sólo son delitos en sí mismos: son mecanismos mediante los cuales los intereses de los rebeldes y los de los delincuentes no políticos se igualan y se complementan. En este sentido puede afirmarse que una de las grandes paradojas de la lucha guerrillera colombiana es que si bien puede aceptarse que a los guerrilleros no los inspira la codicia, sí contribuyen a despertarla o exacerbarla en otros: en los delincuentes comunes organizados. Así no lo reconozcan públicamente, a ellos les corresponde

la responsabilidad histórica de incrementar la delincuencia, facilitar el rebusque y la corrupción y, lo que es peor, obstaculizar una eventual conciencia social de parte de los sectores más dominados y excluidos de la sociedad que los pudiera llevar a organizarse en acciones colectivas de reivindicación y cambio social.

Un quinto punto tiene que ver con las estrategias de ubicación territorial de las guerrillas. Éstas, en efecto, han tendido a privilegiar las regiones más dinámicas económicamente, en cuanto son la fuente privilegiada de recursos financieros. Según Camilo Echandía, quien ha seguido sistemáticamente el tema, las guerrillas buscan asentarse en municipios de campesinado medio cafetero y no cafetero, de latifundio ganadero, de agricultura empresarial, de minifundio andino deprimido o de estructura urbana²⁵. Pero de manera preferencial, las FARC especialmente, han buscado copar las regiones productoras de hoja de coca, en donde encuentran las mayores fuentes de excedentes líquidos fácilmente recolectables. En esas mismas regiones encuentran también una población joven, compuesta por aventureros o campesinos locales, quienes se convierten en los objetivos favoritos del reclutamiento voluntario o forzado.

La coexistencia geográfica de las FARC y los cultivos ilícitos ha dado pie a la teoría de la narco-guerrilla, la cual ha servido para desacreditarlas y propiciarles una severa derrota internacional, al punto que analistas como Collier han llegado a afirmar que las organizaciones rebeldes colombianas (de la extrema izquierda y la extrema derecha) que surgieron basadas en los agravios (*grievance-based organizations*), hoy se han convertido en baronazgos de la droga²⁶. El ELN ha su turno ha privilegiado las regiones productoras de petróleo, oro y carbón, donde también encuentra liquidez inmediata y población joven reclutable.

Estos patrones de ubicación territorial han incidido también en el estímulo a formas paralelas de violencia. A este respecto se han realizado investigaciones en las que se muestra cómo los incrementos en la criminalidad homicida en algunos municipios se relaciona con la presencia de

²⁵ Echandía, Camilo. "Expansión territorial de las guerrillas colombianas: geografía, economía y violencia". En: Llorente, María Victoria y Deas, Malcolm (editores). *Reconocer la guerra para construir la paz*, Bogotá: CEREC-Uniandes-Norma, 1999. Véase también: "Evolución reciente del conflicto armado en Colombia: la guerrilla". En Arocha, Jaime; Cubides, Fernando y Jimeno, Myriam (compiladores). *Las violencias: inclusión creciente*. Bogotá: Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia - Colección CES, 1998.

²⁶ Collier, Paul. Ob. cit., 2000, p. 100.

organizaciones insurgentes; con su acción corren los aparatos de justicia y seguridad ciudadana, y estimulan formas de delincuencia que son de su conveniencia en tanto les permiten los intercambios ya mencionados²⁷.

UN BALANCE: AGRAVIOS Y CODICIA

De nuevo, la investigación empírica sobre las relaciones entre la codicia y el ánimo reivindicatorio de injusticias de las guerrillas colombianas, vale decir, entre el ánimo de lucro y el afán justiciero, requiere información más detallada. La complejidad de nuestro conflicto armado es tal que las barreras entre las motivaciones egoístas y las altruistas son crecientemente tenues, y es innegable que este proceso de indistinción deberá incrementarse con el paso del tiempo si no se afronta de manera decidida una política alternativa de paz y resolución de conflictos. El ejemplo del paramilitarismo sirve para ilustrar el punto. En efecto, ante la incapacidad estatal de llevar a cabo una política eficaz de paz, varios sectores propietarios, en particular narcotraficantes convertidos en terratenientes, estimularon y financiaron organizaciones armadas con el argumento de que era necesario poner fin a los abusos guerrilleros. Lo que empezó como un sistema relativamente concentrado en una región del país y como una organización específica de defensa de unos cuantos terratenientes, hoy se ha convertido en un ejército alternativo a las guerrillas, que crecientemente logra una cobertura nacional. Pues bien, sus fuentes de financiación siguen cursos similares a los de las guerrillas. Se asientan en zonas de fuerte actividad económica, de concentración de la propiedad agraria en grandes extensiones ganaderas y, en especial, de proliferación de cultivos ilícitos. El que en los casos de los grandes propietarios las contribuciones sean voluntarias o forzadas no cambia mucho las cosas: de cualquier manera, son aparatos militares que viven de los excedentes económicos locales.

Carlos Castaño ha reiterado que si bien su organización no ampara y cohonesto el narcotráfico, sus huestes sí se nutren de sus aportes. A diferencia de las FARC, que se apropian de los excedentes producidos por los campesinos cultivadores, los paramilitares perciben los suyos de los narcotraficantes propietarios de tierras,

aunque no desechan el impuesto a los productores directos. De esta manera, la coca financia los dos extremos de la guerra: coca para las FARC, cocaína para los paramilitares.

Sin duda lo más importante en el desarrollo del paramilitarismo es el proceso de cambio que se puede detectar en sus orientaciones políticas²⁸. En efecto, lo que empezó como una decisión de defender a sangre y fuego la propiedad territorial, e incluso el negocio de la cocaína, crecientemente tiende a transformarse en un proceso de politización. Es errático y contradictorio, desde luego, en la medida en que su defensa de un orden social pasa por el ejercicio permanente del asesinato y la masacre de poblaciones campesinas que son, en su supuesta teoría política, las víctimas directas de la acción guerrillera.

Pero independientemente de esta contradicción, un seguimiento a las posiciones expresadas por la cúpula paramilitar indican que cada día afianzan más un discurso político, dibujado como una contradicción sistemática con las pretensiones militares guerrilleras. No hay que olvidar, por otra parte, que un número considerable de comandantes del paramilitarismo son antiguos miembros de las guerrillas y del Ejército Nacional. Aunque el tránsito de una organización a otra los puede matricular en la categoría de mercenarios, es también muy probable que aporten a la nueva organización, además de informaciones sobre la naturaleza, organización, estrategias y tácticas guerrilleras, algunos principios políticos aprendidos durante sus anteriores militancias. Si se supone que los guerrilleros y militares se inscribieron en esas organizaciones por un sentido de defensa de unos ideales o principios, no es muy absurdo pensar que conserven algunos de ellos, sólo que ahora planteados desde el otro extremo del espectro político-ideológico.

El texto siguiente, publicado con ocasión de las recientes elecciones presidenciales, es una muestra de cómo las Autodefensas Unidas de Colombia perciben el proceso político colombiano:

Las AUC tienen una unidad política como ideología, pero en las AUC hay conservadores, noemistas (sic), uribistas o serpistas. Eso es democracia. No vamos a hacer proselitismo por ningún candidato y respetamos las preferencias electorales de nues-

²⁷ Echandía, Camilo. "Violencia y desarrollo en el municipio colombiano, 1990-1992". En: DANE. *Boletín de estadística*, No. 476, 1995. Cfr. Rubio, Mauricio Ob. cit., *pássim*.

²⁸ Véase Cubides, Fernando. "De lo privado y de lo público en la violencia colombiana: los paramilitares". En: Arocha, Jaime; Cubides, Fernando y Jimeno, Myriam. Ob. cit.

tra base social. Mi propuesta es que haya una votación masiva en Colombia, pero que cada quien vote por quien quiera²⁹.

Y en el mismo sentido se ha expresado reiteradamente el máximo dirigente político de la organización:

Las Autodefensas Unidas de Colombia nos comprometemos, por convicción, a respetar el libre ejercicio de la democracia en las elecciones presidenciales del próximo domingo. Igualmente, invitamos a todos los colombianos, particularmente a los habitantes de las regiones donde las AUC ejercemos presencia social y política, y que gozan del derecho constitucional para ejercer el voto de opinión, a que participen de este espectáculo de la democracia depositando su voto por el candidato o la candidata de su preferencia.

Las AUC, como organización armada, están completamente al margen de la contienda electoral. No estamos unidos en torno a ningún candidato en particular. Hay en nuestra organización serpistas, uribistas, noemicistas y otros con Garzón. Nuestras tropas están exclusivamente atentas a brindar seguridad a los colombianos ante la amenaza proferida por las FARC y el ELN, quienes se empeñan en impedir las elecciones. Este mismo mensaje hemos impartido directamente a todos y cada uno de nuestros comandantes quienes lo difunden en sus respectivas regiones.

Las AUC pedimos que se incremente la presencia de observadores de la OEA en nuestras zonas de influencia y en todo el país, para que no quede la menor duda a la comunidad internacional de nuestro respeto al libre desarrollo democrático de la próxima contienda electoral.

Liderazgo y autoridad legítima sólo se adquieren con el consenso que otorga la libre voluntad de un pueblo a su presidente. Es éste el mérito y la gobernabilidad que puede alcanzar cualquiera de los candidatos el próximo domingo. A ver si algún día conseguimos que el Estado nos ayude a dirimir nuestros conflictos sin matarnos entre nosotros y despertarnos un día con ese Estado Social de Derecho, eso con lo que tanto soñamos³⁰.

Ahora bien, no parece que se pueda hacer la distinción entre guerrilleros y paramilitares en lo

que respecta a la dicotomía entre agravios y codicia. Que los paramilitares defiendan a los propietarios y al Estado y su legalidad, indica que no los inspira la simple codicia. Como se ha dicho en otras oportunidades, en este sentido los paramilitares son el espejo de las guerrillas. Sus diferencias se dan en otros terrenos; particularmente en el carácter y estilo de sus luchas: el optar por cometer asesinatos colectivos y masacres contra poblaciones civiles indefensas, el forzar el éxodo de campesinos, el ejecutar las llamadas limpiezas sociales, los convierte en una fuerza muy diferente de las guerrillas, ciertamente, pero no les da el carácter de codiciosos. Esto no significa, vale reiterarlo, que los paramilitares puedan hacer simple y llanamente una transición hacia lo político: el peso de su pasado de asesinatos de civiles y su relación orgánica con los narcotraficantes es demasiado fuerte. Tendrán que experimentar muchos más cambios antes de que puedan acceder al calificativo de delincuentes políticos.

GANADORES Y PERDEDORES

Las guerras civiles infligen costos muy altos a una economía. Estimo que en promedio durante las guerras civiles la economía como un todo declina cerca de 2,2 por ciento por año en relación con su senda de crecimiento. Ésta parece ser una cifra pequeña, pero implica que después de una década de guerra una sociedad tendrá un ingreso 20 por ciento más bajo que lo que de otra manera tendría³¹.

Sin embargo, estas pérdidas para la sociedad pueden ser ocasiones de lucro para algunos de sus miembros. Según Collier, durante los períodos bélicos las sociedades devienen menos predecibles, lo que estimula los comportamientos especulativos y oportunistas de quienes buscan la ganancia rápida y eficaz, sin que importen las consideraciones sobre la buena o mala reputación de los negociantes. En segundo lugar, en esos períodos tiende a incrementarse la criminalidad. Los estados reducen el gasto en policía, lo que genera mayor inseguridad, que se traduce en una mengua de negocios legítimos e inversiones a largo plazo: los financistas más alertas tratan de volver líquidos sus activos y tienden a sacarlos del país, buscando con ello mayor seguridad y renta-

²⁹ Entrevista a Carlos Castaño. *El Espectador*, 19 de mayo de 2002.

³⁰ Carlos Castaño Gil, Dirección política AUC. Colombia, 20 de mayo de 2002. Véase también: Aranguren Molina, Mauricio. *Mi confesión. Carlos Castaño revela sus secretos*. Bogotá: Editorial Oveja Negra, 2001.

³¹ Collier, Paul. Ob. cit., 2000, p. 101.

bilidad. En tercer lugar, la guerra produce distorsiones y fallas en la información, lo que se traduce en un debilitamiento de la competencia que reduzca los márgenes de rentabilidad y establezca equilibrios entre las partes. Los oportunistas tenderán a dificultar la entrada de competidores, los mercados a ser más monopólicos, y así los márgenes de ganancia se incrementan. En cuarto lugar, los márgenes de apropiación de rentas y depredación en el mercado se incrementan tanto para los rebeldes como para los funcionarios corruptos, ya que su acción puede ser más clandestina. Intercambios de información sobre capitalistas secuestrables, venta de armas de dotación oficial, favorecimiento en contratos de gasto público, establecimiento de controles al transporte de mercancías y otros mecanismos de obtención de ganancias extraordinarias tienden a incrementarse en medio del desorden de la guerra³².

En nuestro caso, los perdedores con la guerra somos los colombianos que debemos sufragar el 1,55% del PIB representado en el exceso del gasto militar, el gasto en salud, la pérdida de vidas asociadas al conflicto, los ataques a la infraestructura, los desplazamientos forzados secuestros, robos y extorsiones³³. Es claro que en el caso de los desplazamientos, los secuestros, robos y extorsiones, más allá del sufrimiento o empobrecimiento de las víctimas, su dimensión económica se expresa en cambios en la propiedad, y en consecuencia no son costos para la sociedad. A estas cifras se debe agregar lo que representa el descenso en la inversión extranjera y la fuga de capitales. A lo anterior se debe sumar el gasto en seguridad, que Planeación Nacional estima en el 3,5% del PIB. La verdadera dimensión de estas cifras se hace evidente cuando se considera que se trata de fondos que bien podrían ser invertidos en la resolución de las múltiples necesidades insatisfechas de la población.

Los perdedores contrastan con los ganadores. Los traficantes de drogas ilícitas han encontrado en la protección de grupos armados un mecanismo para obtener ganancias extraordinarias a partir del cobro de primas de riesgo. Su aporte

significa ingresos para los diferentes grupos armados. Aunque una porción de éstos se dedica a pagar salarios y al avituallamiento de los miembros, y en este sentido lo que sale de un bolsillo pasa a otro, y por tanto no es un costo real, otra buena parte se gasta en la importación de armamento. Los traficantes de armas tienen una clientela creciente que no se pone en miramientos respecto de los precios, ya que los recursos para ellos no tienen un costo alto. Los proveedores internacionales han encontrado en la demanda del Estado colombiano y de los alzados en armas una buena fuente de ingresos. En más de una ocasión ha sido denunciado cómo una importante faceta del Plan Colombia es la operación de un mecanismo que parece reproducir la lógica de lo que el General Eisenhower llamó "el complejo industrial-militar", mediante el cual los grandes productores de armas, los ex militares organizados en empresas mercenarias, entre otros, estimulan la guerra como fuente de ganancias³⁴.

UN INTENTO DE SÍNTESIS

El balance, pues, es extraño y complejo: a manera de síntesis, desearía plantear los siguientes puntos: en primer lugar, que las organizaciones guerrilleras colombianas han surgido y se han desarrollado a partir de percepciones de injusticias y agravios representados en las agresiones perpetradas contra el campesinado, la mala distribución de los recursos, la incapacidad estatal para proveer justicia y satisfacer las necesidades de los más pobres, la exclusión política y la ausencia de posibilidades de transformación social por vías no armadas. En segundo lugar, las necesidades de mantenimiento de los ejércitos rebeldes se traducen en la búsqueda de recursos financieros cuyos orígenes son ilegítimos, lo que incrementa su carácter ilegal. En tercer lugar, puede darse una tendencia, al menos en algunos sectores de esas organizaciones, a distorsionar los propósitos de la búsqueda de recursos, y en consecuencia a vaciar la ideología de transformación social y a desarrollar un ánimo de lucro y de codicia. He sostenido que, al menos por ahora, éste no es el caso del grueso de las organizaciones guerrilleras, pero que podría desarrollarse si se cerraran más aún

³² *Loc. cit.* Véase también: Naylor, R.T. "From Cold war to Crime War: The Search for a New 'National Security' Threat". En: *Transnational Organized Crime*. Vol. 1, No. 4, 1995, pp.37-56.

³³ Castro, Manuel Fernando; Arabia, Jorge y Celis, Andrés Eduardo. "El conflicto armado: la estrategia económica de los principales actores y su incidencia en los costos de la violencia 1990-1998". En: *Planeación y desarrollo*. Vol. XXX, No. 3. julio-septiembre de 1999, pp. 81 y ss.

³⁴ Galbraith, John Kenneth. *La anatomía del poder*. Barcelona: Plaza y Janés, 1985.

las puertas a una negociación política. En cuarto lugar, he sostenido que los paramilitares parecen transitar del simple protector de propiedades y de narcotraficantes a unas organizaciones de la extrema derecha que defienden un orden social. Pero he afirmado que ese paso no puede ser simple, y que para que ello sea posible es preciso no sólo que sobre ellos opere la justicia por sus atrocidades, sino

que rompan todo vínculo con los intereses gremiales y clasistas que supuestamente defienden. En quinto lugar, parece que no hay duda de que el conflicto armado colombiano ha tenido unos efectos que van más allá de las tragedias propias de cualquier guerra. Se trata de otros, bastante perversos, y que consisten en que han facilitado y estimulado la codicia de quienes se lucran con la guerra.